

32ª REUNION — Continuación de la 23ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora y señor Roberto Dri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

MINISTRO PRESENTE:

de Hacienda,

Doctor Ramón Antonio Ce-  
reijo

DIPUTADOS PRESENTES:

Albriou, Oscar E.  
Alvarez Pereyra, Manuel  
Allub, Rosendo  
Astorgano, José  
Alala, Luis  
Ayala López Torres, Francisco  
Bagnasco, Vicente  
Beretta, Eduardo  
Bernández, Manuel  
Benino, Alberto C.  
Busios Fierro, Raúl  
Butterfield, Humberto  
Cámpora, Héctor J.  
Camus, Eloy P.  
Cané, José  
Carreras, Ernesto A.  
Casta Nobrega, Armando  
Cleve, Ernesto  
Colom, Eduardo  
Conte Grand, José Amadeo  
Cooke, John William  
Cursack, Roberto Enrique  
Dacker, Rodolfo A.  
Degreaf, Juan Ramón  
De la Torre, Juan  
Díaz, Carlos A.  
Díaz, Manuel J.  
Díaz de Vivar, Joaquín  
Dri, Roberto  
Erra, Saturnino S.  
Estrada, Angel C.  
Fernández, Hernán S.  
Ferrando, Manuel P.  
Filippo, Virgilio M.

Forteza, Eduardo Julio  
Fregassi, Luis J.  
Garaguso, Bernardino Hipólito  
Garay, Marcelino E.  
García, Manuel  
Giménez Vargas, Francisco  
Haramboure, Horacio  
Ibarguren, Prudencio M.  
Lagraña, Héctor D.  
Larrea, Ricardo  
Lasciar, Guillermo F.  
Lavín, Ludovico  
Loloir, Alejandro H.  
Loma, Manuel E.  
Letamendi, Balbino (h.)  
Lucini, Raúl Felipe  
Mariategui, Angel S.  
Marini, Angel C.  
Marotta, José  
Martínez Luque, Enrique  
Messina, Humberto  
Miel Asquía, Angel J.  
Montes, Juan Manuel  
Montes de Oca, Carlos  
Montiel, Alcides E.  
Moreno, José Luis  
Novellino, Francisco  
Olnalde, Rafael  
Olloneira, Benito J.  
Palacio, Ernesto  
Pasquall, Juan Domingo  
Pereyra, Luis Alberto  
Pirani, Antonio S.  
Ponce, Angel L.  
Pontieri, Silverio  
Repetto, Agustín  
Reynés, Leandro R.  
Roche, Luis Armando  
Rodríguez, Manuel  
Rodríguez, Nerio M.  
Rossi, José  
Rouglier, Valerio S.

Rumbo, Eduardo I.  
Sánchez, Pedro  
San Millán, Ricardo Antonio  
Saporiti, Luis  
Saravia, Teodoro S.  
Sarmiento, Manuel  
Seber, Carlos Manuel  
Silvestre, Adolfo J. B.  
Tejada, Ramón Washington  
Tilli, Pedro  
Tommasi, Victorio M.  
Valdez, Celestino  
Varea, Isidoro  
Velloso Colombres, Manuel F.  
Vergara, Amando  
Villacorta, Luis René  
Visca, José Emilio  
Vlachi, Albino  
Zamudio, Juan Carlos

AUSENTES, CON LICENCIA:

Argaña, José M.  
Bldegain, Oscar R.  
Brugnerotto, Juan N. D.  
Córdova, J. Salvador  
Pasquini, José P. D.  
Pera, Pedro J.  
Pierotti, Mario  
Toro, Ricardo  
Villafañe, José María

AUSENTES, CON AVISO:

Bruno, Domingo  
Guarda, Ricardo C.  
Riagno, Roberto

AUSENTES, SIN AVISO:

Aráoz, Ricardo E.  
Balbin, Ricardo  
Benítez, Antonio J.  
Bonazzola, Rumeo E.

Candiotti, Alberto M.  
Cattáneo, Atilio E.  
Cufre, Orlando H.  
Dávila, J. Anibal  
Del Carril, Emilio Donato  
Del Mazo, Gabriel  
Dellepiane, Luis  
Fajre, José Benito  
Ferrari, Modesto  
Frondizi, Arturo  
Gil Flood, Mario  
González Funes, Tomás  
Hija, Arturo U.  
Lloanga, Félix J.  
López Serrot, Oscar  
Mac Kay, Luis R.  
Malneri, D. Jacinto  
Mántaras, Manuel J.  
Martínez Guerrero, Guillermo  
Merander, Emir E.  
Menjardín, Federico F.  
Noriega, Juan J.  
Parry, Roberto  
Pastor, Reynaldo A.  
Pérez Martín, José  
Rabanal, Francisco  
Rodríguez Araya, Agustín  
Rodríguez de la Torre, Raúl  
Rojas, Abanón  
Rojas, Nerio  
Rudi, Ricardo  
Santander, Silvano  
Sobral, Antonio  
Solá, Fernando  
Uranga, Raúl L.  
Urtiaga Bilbao, Mateo de  
Vannasco, Julio A.  
Vilela, Alfredo R.  
Yadarola, Mauricio L.  
Zanoni, Pedro P.  
Zavala Ortiz, Miguel Angel

## SUMARIO

- 1.—La Honorable Cámara en comisión continúa el estudio del proyecto de ley sobre crédito extraordinario para cubrir déficit de ejercicios financieros de la provincia de San Juan, correspondientes a los años 1947 y 1948.
- 2.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 1 de este sumario. Se sanciona.
- 3.—Moción del señor diputado Miel Asquía, de fijación del orden de consideración de asuntos.
- 4.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre adicional al impuesto destinado a la integración de un fondo de ayuda a los hipódromos.
- 5.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 4 de este sumario. Se sanciona.
- 6.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre sueldos de apoderados del Consejo Nacional de Educación.
- 7.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 6 de este sumario. Se sanciona.
- 8.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre crédito extraordinario al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para abonar honorarios de la confección del anteproyecto de reformas al Código Civil.
- 9.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 8 de este sumario. Se sanciona.
- 10.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre ordenamientos de leyes impositivas.
- 11.—Consideración del despacho de la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 10 de este sumario. Se sanciona.
- 12.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre organización de la Dirección General Impositiva.
- 13.—Consideración del despacho de la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 12 de este sumario. Se sanciona.
- 14.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre exención de gravámenes fiscales a las representaciones diplomáticas y consulares.
- 15.—Consideración del despacho de la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 14 de este sumario. Se sanciona.
- 16.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre habilitación como aduanas mayor de la receptoría de Comodoro Rivadavia.
- 17.—Consideración del despacho de la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 16 de este sumario. Se sanciona.
- 18.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre creación de la receptoría de rentas en San Rafael, Mendoza.
- 19.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 18 de este sumario. Se sanciona.
- 20.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre creación de la receptoría de rentas en San Lorenzo.
- 21.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 20 de este sumario. Se sanciona.
- 22.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre extensión de franquicias aduanaeras a establecimientos hospitalarios privados.
- 23.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 22 de este sumario. Se sanciona.
- 24.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre subsidio a las viudas de representantes obreros a la Conferencia de Ginebra.
- 25.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 24 de este sumario. Se sanciona.
- 26.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley en revisión sobre arancel del Boletín Oficial.
- 27.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 26 de este sumario. Se sanciona.
- 28.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre prórroga de la vigencia del impuesto a los beneficios extraordinarios.
- 29.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto

de ley a que se refiere el número 28 de este sumario. Se sanciona.

- 30.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre prórroga de la tasa establecida para el impuesto a las ventas sobre las operaciones de exportación.
- 31.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 30 de este sumario. Se sanciona.
- 32.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre prórroga de la aplicación del decreto 15.921/46, ratificado por ley 12.922, que desgrava las rentas reinvertidas en la industria.
- 33.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 32 de este sumario. Se sanciona.
- 34.—La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reducción de impuestos a las explotaciones agrícolas, ganaderas, mineras y de pesca y a las empresas de transporte.
- 35.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 34 de este sumario. Se sanciona.
- 36.—La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre derogación de impuesto interno a productos destinados a la elaboración de licores.
- 37.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 36 de este sumario. Se sanciona.
- 38.—La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación de la ley orgánica del ejército.
- 39.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 38 de este sumario. Se sanciona.
- 40.—La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley de creación de la infantería de marina.
- 41.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 40 de este sumario. Se sanciona.
- 42.—La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autorizan créditos para construcciones militares.

- 43.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 42 de este sumario. Se sanciona.
- 44.—La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre organización de la Nación en tiempo de guerra.
- 45.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 44 de este sumario. Se sanciona.
- 46.—La Honorable Cámara en comisión considera el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre clasificación de zonas de vuelo prohibidas.
- 47.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 46 de este sumario. Se sanciona.
- 48.—La Honorable Cámara en comisión considera el despacho de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica las normas de cómputo de antigüedad establecidas en los artículos 44 y 79 de la ley orgánica para el personal de la marina de guerra.
- 49.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 48 de este sumario. Se sanciona.
- 50.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se modifican las normas de clasificación establecidas en el artículo 52 de la ley orgánica para el personal de la marina de guerra.
- 51.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 50 de este sumario. Se sanciona.
- 52.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre presupuesto y cálculo de recursos para 1948 de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
- 53.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 52 de este sumario. Se sanciona.
- 54.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificaciones al régimen orgánico de la aeronáutica.
- 55.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 54 de este sumario. Se sanciona.
- 56.—La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre crea-

ción de becas en el Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown.

57.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se refiere el número 56 de este sumario. Se sanciona.

58.—Moción del señor diputado Miel Asquía, de fijación del orden de consideración de asuntos.

59.—Apéndice:

I.—Inserciones.

—En Buenos Aires, a los doce días del mes de agosto de 1948, a la hora 16 y 35:

1

#### CONFERENCIA. — CREDITO EXTRAORDINARIO

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa la sesión.

Queda reanudada la conferencia. Continúa la consideración del proyecto de ley por el que se abre un crédito extraordinario para cubrir los déficit de los ejercicios financieros de la provincia de San Juan correspondientes a los años 1947 y 1948.

Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

—Ocupa su asiento en el recinto el señor ministro de Hacienda, doctor Ramón Antonio Cereijo.

Sr. Camus. — Señor presidente: previo a todo, anuncio mi voto favorable al proyecto del señor diputado Conte Grand que ha sido despachado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la firma de todos los miembros que la integran y por el cual se acuerda al gobierno de San Juan un subsidio de 25.000.000 de pesos, como contribución del gobierno federal a la regularización financiera de la administración pública de dicha provincia.

Para fundar mi voto he de analizar en detalle los hechos que han provocado la difícil situación por que atraviesan las finanzas públicas sanjuaninas y que han generado los pesados déficit que en este momento se trata de enjugar.

Hechas estas aclaraciones que juzgo indispensables para fijar mi posición en este debate, entro en materia, y para ello he de examinar el problema con toda serenidad y con criterio absolutamente objetivo, como cuadra en asuntos de esta índole.

Señor presidente: San Juan soporta el peso de tres presupuestos: el ordinario de la provincia, el del plan de obras públicas y el de las reparticiones descentralizadas. El monto total de estos presupuestos asciende en los gastos a la suma de 103.548.580,54...

Sr. Tejada. — Si me permite el señor diputado...

Yo entiendo que el señor diputado tendrá que discriminar la parte que corresponde al presupuesto ordinario de la provincia...

Sr. Camus. — No se apresure, señor diputado y escuche lo que voy a decir.

Sr. Tejada. — ...porque el señor diputado incluye también lo relativo al plan de obras públicas, que corresponde a leyes especiales.

Sr. Camus. — Si el señor diputado hubiese esperado: se hubiese evitado la interrupción. Precisamente, estoy haciendo la discriminación de estas partidas.

El total de recursos es de 103.905.602,34 pesos. El presupuesto disminuye a 99.034.678,7 pesos, con la deducción de las asignaciones del presupuesto destinadas a reparticiones descentralizadas.

Hasta ahora la Nación ha solventado en su mayor parte los apremios financieros de la administración pública sanjuanina. La ayuda federal prestada en forma generosa contribuyó a salvar los graves trastornos ocasionados por el terremoto de 1944, a que aludió ayer el señor diputado Tejada, y que repercutieron intensamente en la aptitud de pago de los contribuyentes, determinando así los considerable déficit que arrojaron los ejercicios de 1944, 1945 y de 1946. En 1947 los gastos se calcularon en 32.590.391,10, y los recursos en 22.968.856,40. En 1948, estos rubros se han calculado en 44.421.431,46 y en 30.190.971,63, respectivamente.

El crecimiento de los recursos calculados para 1948, de haberse mantenido el presupuesto de gastos vigente para 1947, hubiera permitido la nivelación automática y efectiva del presupuesto; que sólo acusaría la posibilidad de un déficit de 2.399.419,47, fácilmente corregible con un racional reajuste de las erogaciones.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Camus. — Sí, señor ministro.

Sr. Ministro de Hacienda. — Como observo que en algunos datos no coincidimos, quería ver si nos poníamos de acuerdo.

¿Cuál es el importe que ha citado para el cálculo de recursos del presupuesto para el año 1947?

Sr. Camus. — Los gastos se han calculado en 32.590.391,10 pesos.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¿De dónde sale el cálculo?

Sr. Camus. — Del presupuesto.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alvarez Pereyra. — El refuerzo que se propone por el proyecto de ley que estamos tratando, es una consecuencia del normal desarrollo del plan de construcciones militares de la ley 12.737, siendo indispensable para satisfacer las necesidades impostergables del ejército en materia de nuevos cuarteles, edificios para redes de comandos, distritos militares y grandes reparticiones, construcción de barrios militares, construcciones hospitalarias, taller regional y arsenales.

Estas obras se realizarán en un período de varios años, pero por razones técnicas se hace imprescindible contar desde ya con los créditos necesarios para poder imputar las sumas a comprometer por adjudicación de obras durante los años 1948, 1949 y 1950.

Las inversiones anuales a realizar en obras por el Departamento de Guerra no superan el 10 % del total de las obras públicas nacionales. Por otra parte, la influencia en materiales, mano de obra y transporte que pueden tener en el mercado nacional, es reducida, y no interfiere el desarrollo normal de los planes de obras de los otros departamentos de Estado y de la actividad privada.

Los problemas que el Departamento de Guerra tiene planeado resolver con los créditos que se solicitan coinciden con la orientación general de la obra de gobierno, en especial en lo que se refiere a la vivienda y salud pública, en cuyas soluciones coadyuva eficazmente en zonas alejadas, donde la acción del Estado y la privada no se hacen sentir con suficiente intensidad.

En el plan de trabajos a realizar con los créditos que se solicitan, a la vez que se contempla el problema de la defensa nacional, se procuran soluciones de interés general para las poblaciones de distintas zonas del país, a las que se les proporciona trabajo y se facilita la solución de los problemas sanitarios y de la vivienda.

Por estas razones, pido a la Honorable Cámara la sanción del proyecto de ley en discusión.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Marini. — Hago indicación de que se adopte, como despacho de la Cámara en comisión, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la indicación del señor diputado por Santa Fe.

—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda levantada la conferencia.

43

## CONSTRUCCIONES MILITARES

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar en general el despacho producido por la Honorable Cámara en comisión, en el proyecto de ley por el que se abren créditos para construcciones militares.

—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración, en particular, el artículo 19. Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 29. Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 75 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 39. Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 79 votos; votan 82 señores diputados.

—El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda sancionado el proyecto de ley.

44

## CONFERENCIA. — ORGANIZACION DE LA NACION EN TIEMPO DE GUERRA

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda la Cámara constituida en comisión, a fin de estudiar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre organización general de la Nación en tiempo de guerra.

Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.

—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se va a dar cuenta del proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, comandante en jefe de todas las fuerzas armadas y presidente del Consejo de Defensa Nacional, compete solidariamente a los ministros secretarios de Estado todo cuanto pertenece a la preparación, organización y dirección de la defensa nacional.

Art. 2º — Las provisiones necesarias para la organización de la Nación en tiempo de guerra deberán acordarse desde tiempo de paz de acuerdo con las actividades fijadas por el Consejo de Defensa Nacional, preparación y ejecución de los planes y programas tendientes a satisfacer esas provisiones hasta en sus menores detalles corresponderá a los ministerios o secretarías de Estado por intermedio de sus organismos dependientes y de aquellos que, a los efectos de coordinación, crease especialmente el Consejo de Defensa Nacional.

Art. 3º — Al Consejo de Defensa Nacional incumbe la responsabilidad de adoptar las medidas tendientes a la organización del país en tiempo de paz y a la organización para tiempo de guerra. En tal caso, el Consejo impartirá la orientación necesaria a todos los organismos de Estado para preparar:

- 1) La movilización de todas las fuerzas armadas de la Nación;
- 2) La movilización del potencial necesario para organizar la defensa civil, la seguridad interior, el funcionamiento normal de la administración y de los servicios públicos, y asegurar un ritmo de trabajo intensivo en todos los órdenes de la producción, el comercio y la industria;

La movilización y utilización para tiempo de guerra de todos los recursos morales y materiales del país;

La creación de los organismos necesarios para planificar, coordinar y dirigir el aprovechamiento del potencial de guerra de la Nación.

4º — Los problemas fundamentales que atañen a la organización general de la Nación para la guerra serán resueltos por el Poder Ejecutivo en acuerdo con los ministros, constituido en Consejo de Defensa Nacional.

La resolución de asuntos especiales o de naturaleza determinada, cuya coordinación sólo requiera la intervención de algunos de los ministerios o secretarías de Estado, el presidente de la Nación, a fin de una adecuada subdivisión del trabajo y una mayor celeridad en los trámites, podrá constituir, del Consejo de Defensa Nacional, comisiones permanentes o gabinetes parciales.

Las resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo en órdenes parciales de gabinete tendrán la misma fuerza que las adoptadas en los acuerdos generales.

5º — Si en tiempo de guerra fuera necesario crear nuevas tareas o descentralizar las que actualmente tienen los ministerios existentes, el Consejo de Defensa Nacional, en acuerdo plenario, podrá aumentar el número de secretarías de Estado con categoría de ministerio. En tal caso, los decretos emanados de las secretarías de Estado llevarán, además de la

firma de su titular, la de alguno de los ocho ministros permanentes.

El presidente de la Nación podrá crear nuevos organismos o ampliar los existentes, para poner en ejecución los planes de la movilización general del país. Asimismo, podrá encomendar funciones ejecutivas o de contralor, a los organismos asesores que colaboran con el Consejo de Defensa Nacional en la preparación, organización y dirección de los planes que integran el plan general de la Defensa Nacional.

Art. 6º — Las funciones encomendadas al Consejo de Defensa Nacional por la presente ley y los decretos leyes 9.330/43 y 13.939/44 (ley 12.913) serán cumplidas por intermedio de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional.

La Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, además de asesorar y estudiar los asuntos que dicho consejo le encomiende, constituye el órgano natural por intermedio del cual el presidente del Consejo de Defensa Nacional prepara e imparte a los organismos ejecutores las órdenes e instrucciones uniformes a que han de ajustarse en el cumplimiento de su cometido, y por conducto del cual se informa acerca de su cumplimiento.

Art. 7º — El Consejo de Defensa Nacional fijará, desde tiempo de paz, la misión, atribuciones y responsabilidades de cada ministerio o secretaría de Estado, en la preparación del país para la guerra, en la movilización y utilización de las personas y recursos concernientes a cada rama de la administración pública, así como de las actividades y recursos de las personas e instituciones de derecho privado que cada secretaría de Estado, en cumplimiento de sus funciones, dirige, fomenta, regula o fiscaliza.

Art. 8º — La movilización de las fuerzas armadas está regulada por las leyes y reglamentos militares. Su ejecución estará a cargo de los organismos militares correspondientes de acuerdo con la orientación fijada para cada una de las fuerzas por el Consejo de Defensa Nacional.

Art. 9º — La movilización en los ministerios civiles será ordenada y ejecutada bajo la responsabilidad del ministro respectivo, por intermedio de las direcciones de Defensa Nacional existentes en cada secretaría de Estado.

Esta movilización se realizará de acuerdo con los planes aprobados por el Consejo de Defensa Nacional y bajo el contralor directo de la secretaría de dicho consejo.

A tal fin, la secretaría actuará como organismo asesor y coordinador entre las distintas secretarías de Estado; impartirá en nombre del Consejo de Defensa Nacional las instrucciones necesarias a las distintas direcciones de defensa, y controlará, por intermedio de los jefes militares de las correspondientes divisiones de la secretaría del consejo, el desarrollo de los planes y la ejecución de las tareas dispuestas, acerca de cuyo cumplimiento mantendrá informado al Consejo de Defensa Nacional.

Art. 10. — Para coordinar la utilización de todos los recursos del país para la guerra y para la preparación de los planes pertinentes, el Consejo de Defensa Nacional establecerá, desde tiempo de paz, el orden de preferencia para la utilización de las personas y recursos, de acuerdo con las necesidades de las fuerzas armadas y ministerios civiles.

Esta coordinación comprende, además de la utilización de las fuerzas de que dispone la Nación, los establecimientos destinados a la fabricación del material de guerra, la movilización industrial, la distribución de la mano de obra y las materias primas,

y todo lo concerniente al abastecimiento general para las tropas, la población civil y las necesidades de la producción económica.

Las fuerzas aéreas tendrán prelación, entre las fuerzas armadas, para movilizar el personal que posea aptitudes o conocimientos especiales para el servicio aeronáutico.

Art. 11. — La conducción de la guerra, en su aspecto polícomilitar, compete directamente al presidente de la Nación, quien adoptará las resoluciones pertinentes en acuerdo parcial de gabinete, asistido de los secretarios de Estado en los ramos de Relaciones Exteriores, Guerra, Marina y Aeronáutica, constituidos al efecto en Gabinete de Seguridad Exterior (o Gabinete de Guerra), con el asesoramiento directo del Estado Mayor de Coordinación.

Las tareas de coordinación que conciernen a este gabinete, cuando no requieran decisión del Poder Ejecutivo, serán adoptadas en reunión de ministros, convocada y presidida por el ministro de Relaciones Exteriores por propia iniciativa o a requerimiento de cualquiera de los ministros que lo integran.

La ejecución de las decisiones tomadas en común compete a cada uno de los ministerios dentro de su respectiva rama de gobierno.

Se organizarán además, y funcionarán bajo las mismas normas que el de Seguridad Exterior, un Gabinete de Seguridad Interior, integrado por los secretarios de Estado en las carteras de Justicia e Instrucción Pública, Obras Públicas y Salud Pública, que bajo la presidencia del ministro del Interior tendrá a su cargo la coordinación de los problemas relativos al frente interno de la Nación en guerra; y un Gabinete de Seguridad Económica, integrado por los secretarios de Estado en los departamentos de Agricultura Comercio e Industria y Trabajo y Previsión, presidido por el ministro de Hacienda, para la coordinación de los problemas de los abastecimientos, la producción, el comercio y las finanzas.

Las nuevas secretarías de Estado que pudieran crearse integrarán el gabinete a que correspondan, según la naturaleza de las funciones de gobierno que les sean asignadas.

Sin perjuicio de los gabinetes parciales que se consignan expresamente en esta ley, el Consejo de Defensa Nacional podrá constituir comisiones ministeriales especiales, para la solución de los problemas y coordinación de las actividades que interesen conjuntamente a dos o más ministerios o secretarías.

Art. 12. — El Gabinete de Seguridad Exterior, a los efectos de la preparación y conducción de la guerra y de la mayor coordinación de las fuerzas armadas en las operaciones conjuntas, será asistido en forma permanente por el Estado Mayor de Coordinación, el que le estará directamente subordinado y se integrará con jefes y oficiales de los estados mayores generales del ejército, la armada y la fuerza aérea, de acuerdo con la organización, objetivos y facultades que el Consejo de Defensa Nacional fije al reglamentar sus actividades.

El Gabinete de Seguridad Exterior y el Estado Mayor de Coordinación, sin perjuicio de los organismos propios de que dispondrá este último, contarán para la realización de sus trabajos, por intermedio del jefe de la secretaría del Consejo de Defensa Nacional, de los subjeses militares, del conjunto de jefes y oficiales y demás organismos dependientes de dicha secretaría.

Del mismo modo los gabinetes de Seguridad Económica y Seguridad del Interior contarán para la realización de sus tareas con la colaboración de dicho personal y los respectivos subjeses de Seguridad Económica y Seguridad del Interior por intermedio del jefe de la secretaría.

Art. 13. — En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente de la Nación procederá a la designación del comandante supremo de las fuerzas armadas para la dirección integral de las operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo.

A los efectos de la conducción de las operaciones, el comandante supremo de las fuerzas armadas dispondrá como órgano asesor del Estado Mayor de Coordinación, el que dependerá directamente del presidente de la Nación (Gabinete de Seguridad Exterior) y será el órgano natural y obligado mediante el cual se impartirán las órdenes e instrucciones a los comandantes en jefe de todas las fuerzas.

Las operaciones terrestres serán dirigidas por el comandante en jefe del ejército de campaña; las operaciones marítimas y fluviales por el comandante de operaciones navales; y las aéreas por el comandante en jefe de la fuerza aérea.

Los comandantes en jefe de las tres fuerzas dependerán, a los efectos de la dirección de las operaciones, del comandante supremo de las fuerzas armadas, pero en la administración y gobierno de las fuerzas a sus órdenes dependerán como siempre de los respectivos secretarios de Estado.

Art. 14. — En tiempo de guerra, el país será dividido en una o más zonas de operaciones y en una zona del interior.

Se declararán zonas de operaciones terrestres las partes del territorio nacional en que deban operar los ejércitos en campaña.

Conforme a las necesidades de las operaciones navales, se declararán una o varias zonas de operaciones navales en el mar, ríos, costas e islas adyacentes.

Cuando alguna parte del territorio nacional sea defendida en forma exclusiva o prevalente por las fuerzas aéreas, aquella podrá ser declarada zona de operaciones aéreas.

Las zonas de operaciones deberán ser delimitadas expresa y concretamente por decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta de las comandantes en jefe, elevadas por intermedio del comandante supremo de las fuerzas armadas.

Será considerada zona de operaciones aéreas, sin necesidad de declaración previa del Poder Ejecutivo, el espacio aéreo que se extiende sobre los territorios y las aguas nacionales, y el espacio adyacente hasta el límite del radio de acción de los aeronaves.

Art. 15. — El Comando Superior destacado en las zonas de operaciones ejerce la autoridad total del gobierno, tanto en lo militar como en lo civil y administrativo. Puede delegar dicha autoridad en los comandantes de ejércitos, escuadras, fuerzas aéreas o comandantes de unidades operativas independientes, respecto a las zonas en que aquéllos actúan.

Los comandantes que ejercen la autoridad total están facultados para imponer la ley marcial dentro de las respectivas zonas de operaciones, dictando a tal efecto los bandos y disposiciones con fuerza de ley que las necesidades de la guerra impongan.

En tal virtud, tienen facultades de mando sobre las autoridades civiles que resuelvan mantener en el ejercicio de sus funciones.

Los magistrados que desempeñen funciones de justicia, y que fueren designados o confirmados en sus cargos por la autoridad militar, mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones judiciales.

Art. 16. — Para los asuntos relacionados con la administración civil de la zona de operaciones, el Comando Superior de la misma tendrá adscrito un Delegado Civil para cada provincia, territorio nacional o parte de éstos que integre la respectiva zona de operaciones.

Los delegados civiles serán designados por el Ministerio del Interior a propuesta de los ministerios de Guerra, Marina o Secretaría de Aeronáutica, según el caso.

Serán designados delegados civiles, en lo posible, los gobernadores de las provincias o territorios nacionales, cuyos territorios o parte de los mismos quedaren comprendidos dentro de los límites de la zona de operaciones.

Los delegados civiles tendrán la función de dirigir uniformemente la administración civil en su jurisdicción y ejercer en nombre del comandante respectivo la autoridad que a éste le compete, en lo que concierne a la administración pública y a la población civil.

Art. 17. — La zona del interior comprende todo el territorio del país que no haya sido declarado zona de operaciones y en ella las autoridades civiles nacionales, provinciales y municipales mantienen su jurisdicción y ejercitan sus atribuciones de tiempo de paz.

La zona del interior es única para las tres fuerzas armadas y en ella el comandante general del interior será quien tenga a su cargo la realización coordinada de los trabajos relativos a la movilización, abastecimientos y transportes de las fuerzas armadas de acuerdo con las directivas impartidas por el Consejo de Defensa Nacional, así como aquellos relacionados con la seguridad de la zona del interior.

Para tales fines los organismos directivos del Comando General del Interior serán integrados por representantes de la marina y aeronáutica.

Art. 18. — Dentro de la zona del interior, y a los efectos de garantizar de manera especial el orden y la disciplina, el Poder Ejecutivo podrá declarar por decreto zona de guerra sometida a la jurisdicción de las autoridades militares y al régimen disciplinario de los tribunales militares, las bases navales y aéreas, los recintos fortificados, los puertos, estaciones ferroviarias, las líneas de transportes, las instalaciones y líneas de telecomunicaciones, los establecimientos industriales, usinas, talleres y depósitos directamente afectados a la producción de materiales de guerra o a cubrir las necesidades de la defensa nacional, y, de manera general, todo recinto militar o militarizado, a condición de que esté perfectamente delimitado y puesto bajo custodia militar efectiva y ostensible.

Art. 19. — La adopción desde tiempo de paz de las provisiones necesarias para la entrada en acción inmediata de todos los medios que concurren a asegurar la defensa activa del territorio contra los ataques aéreos, estará a cargo del Ministerio de Guerra (Comando General del Interior - Comando de Defensa Antiaérea del Interior) y de la Secretaría de Aeronáutica, quienes armonizarán y coordinarán la dis-

tribución y empleo de la artillería antiaérea, aviación y otros medios de que se disponga para tales fines.

Art. 20. — El Ministerio de Guerra (Comando General del Interior - Comando de Defensa Antiaérea del Interior) dirige, de acuerdo con los ministerios interesados, la organización de la defensa pasiva contra el peligro aéreo y demás contingencias de la guerra (bombardeos, incendios, gases, invasión por paracaidistas, etcétera), en todo el territorio del país, con excepción de las bases y demás dependencias aéreas y navales que quedan sometidas a las previsiones adoptadas por las respectivas secretarías de Estado de Marina y Aeronáutica.

A tales fines la defensa antiaérea territorial pasiva comprende el conjunto de medidas destinadas a prevenir y entorpecer los ataques enemigos, así como a reducir y reparar los estragos causados, restableciendo el orden y la normalidad en los servicios públicos, la producción industrial y demás actividades de la población.

Art. 21. — Corresponde al Consejo de Defensa Nacional establecer, desde tiempo de paz, la coordinación de las medidas y provisiones de vigilancia y defensa antiaérea activa y pasiva, territorial y naval, contra el peligro de los ataques aéreos.

Art. 22. — Es obligatoria en todo el territorio de la Nación la organización de la defensa pasiva contra ataques aéreos. Los deberes y prestaciones personales que esa organización comporta son considerados carga pública irrenunciable, a la que están sometidos todos los habitantes del país, nacionales y extranjeros, sin distinción de sexo y según su respectiva aptitud física, de conformidad con las normas reglamentarias que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 23. — Las autoridades nacionales, provinciales y municipales están obligadas a cooperar con las autoridades militares para la organización de la defensa pasiva en el territorio de sus respectivas jurisdicciones. Son, además, las responsables del cumplimiento de las medidas y provisiones ordenadas por las reglamentaciones pertinentes para la población, las instituciones públicas y privadas y los servicios e instalaciones que están sujetos a su autoridad o control.

Art. 24. — Corresponde al Ministerio de Guerra (Comando General del Interior - Comando de Defensa Antiaérea del Interior) promover las medidas reglamentarias que deben dictar las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a fin de que las dependencias oficiales, las entidades que administren servicios públicos y los organismos privados adopten en tiempo de paz las provisiones necesarias para disminuir la vulnerabilidad de los edificios e instalaciones. Dichas medidas impondrán, en especial en los nuevos trazados urbanos y en las nuevas construcciones, las normas de seguridad a que deberán ajustarse. En las construcciones existentes, dispondrán las transformaciones que, en cada caso resulten indispensables para la seguridad de las mismas, de sus habitantes y vecinos.

Art. 25. — Las prestaciones personales para la organización de la vigilancia y defensa antiaérea territorial pasiva, así como para instrucción y preparación de los ejercicios indispensables en tiempo de paz, no podrán exceder de seis horas por mes o de tres días en el año, sin dar lugar a la indemnización correspondiente. Cuando la prestación de servicio exceda de dicho límite, el Estado compensará las horas excedentes de acuerdo con el salario medio horario que



perciba el convocado, determinándolo con sujeción al procedimiento señalado por los artículos 5º y 6º del decreto reglamentario de la ley 9.688, de fecha 14 de enero de 1916, el que no podrá exceder en ningún caso de dos pesos la hora.

Cuando la prestación de servicios no pueda requerirse en los horas libres y sea exigida dentro del horario habitual de trabajo, no exceder de seis horas por mes o de tres días al año, el empleador o patrono no podrá eximirse de la obligación de abonar el sueldo o salario convenido al empleado u obrero. Si la prestación excede de dicho límite, el Estado reintegrará al empleador o patrono la indemnización correspondiente al tiempo excedido.

Art. 26. — El Poder Ejecutivo reglamentará detalladamente las condiciones bajo las cuales, en tiempo de paz, el personal afectado al servicio de vigilancia y defensa antiáerea territorial pasiva podrá ser convocado, utilizado y remunerado en el desempeño de sus funciones, así como indemnizado en los casos de accidentes sufridos en los actos de servicio.

Establecerá, asimismo, la organización de los servicios y centros de instrucción necesarios, otorgando las jerarquías que las necesidades del servicio impongan, haciendo efectivos la obediencia y el respeto jerárquico en todos los escalones de la misma, para lo cual, sin perjuicio de las sanciones administrativas para los funcionarios y empleados de la administración pública por el incumplimiento de sus deberes, podrá imponer sanciones penales de multa de \$ 5 a \$ 1.000 por la primera y segunda contravención y pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia.

Decretada la movilización por causa de guerra o de peligro inminente, regirán las disposiciones del Código de Justicia Militar para el personal convocado para el servicio de vigilancia y defensa antiáerea territorial pasiva como para el convocado al servicio militar.

Art. 27. — El servicio civil de defensa nacional (ley 12.913, artículos 1º y 3º) es el conjunto de obligaciones que el Estado impone a su habitantes no movilizados para el servicio militar a los efectos de contribuir directa o indirectamente a la preparación y sostenimiento del esfuerzo que la guerra impone a la Nación, asegurando la capacidad guerrera de las fuerzas armadas, el mantenimiento del orden interno, el funcionamiento de los servicios públicos, la producción intensiva de los materiales de guerra y los abastecimientos para el frente de batalla y el frente interior, afianzando por todos los medios la vida regular y la capacidad de resistencia de la población civil.

La movilización del servicio civil sólo podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo cuando sea necesaria a los fines de la defensa nacional y en los casos de catástrofes o emergencias graves que afecten partes importantes del territorio nacional o de sus poblaciones.

Art. 28. — En tiempo de guerra el servicio civil de defensa nacional lo cumplen todos los habitantes del país sin distinción de sexo, a partir de los 12 años, incluso los extranjeros, como súbditos temporarios, siempre que no prefieran renunciar al derecho de asilo y ausentarse del país.

En tiempo de paz, lo cumplen los argentinos, sin distinción de sexo a partir de los 12 años, y los extranjeros voluntarios contratados.

Exceptuarse de la prestación del servicio civil a los extranjeros que gocen de inmunidades diplomáticas.

El Poder Ejecutivo podrá establecer en la reglamentación de la presente ley y con carácter general las demás excepciones que considere pertinentes.

Art. 29. — La preparación de la movilización del servicio civil estará a cargo del Consejo de Defensa Nacional, quien deberá crear desde tiempo de paz los organismos encargados de ejecutar, dirigir y fiscalizar los servicios correspondientes, así como aquellos encargados de coordinar sus actividades con las necesidades y previsiones de la movilización militar.

Sin perjuicio de otros organismos dependientes del Consejo de Defensa Nacional (Secretaría) existirán desde tiempo de paz con carácter permanente los siguientes:

Una Comisión de Zonas de Seguridad.

Una Comisión de Movilización Industrial.

Una Comisión de Movilización de la Mano de Obra.

Una Comisión de Indemnización y Subsidios a los Movilizados y sus Familiares.

Art. 30. — En caso de guerra o de su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias graves que afecten alguna zona importante del país, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las requisiciones que sean indispensables para proveer a las necesidades de la defensa nacional.

A tales fines podrá requisar:

- Los servicios individuales o colectivos de todos los habitantes obligados a la prestación del servicio civil de defensa nacional;
- Los servicios de todos los sindicatos, sociedades y asociaciones de todo género, existentes dentro del territorio de la Nación;
- La propiedad y uso de todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país o sus aguas territoriales, sean o no de propietarios argentinos, salvo aquellos que estén protegidos por inmunidades diplomáticas o por leyes especiales de la Nación;
- Las patentes de invención y licencias de explotación ya concedidas, así como cualquier invento.

Art. 31. — A los fines de la organización de la Nación para la guerra, el Poder Ejecutivo podrá proceder desde tiempo de paz, y con carácter obligatorio para todos los habitantes, al levantamiento de los censos especiales que juzgue oportuno. Los datos así recogidos no podrán ser utilizados sino a los fines exclusivos de la movilización y revestirán carácter estrictamente reservado.

Art. 32. — El Poder Ejecutivo reglamentará las formalidades y condiciones en que se realizarán las requisiciones en tiempo de guerra, conforme a las bases fijadas por la presente ley.

Toda requisición da derecho a una retribución o indemnización, equivalente al justo valor de los bienes en el momento de ser requisados.

Únicamente las autoridades especialmente facultadas por el Poder Ejecutivo podrán efectuar requisiciones, las que serán siempre documentadas con recibo firmado por dichas autoridades competentes. La fecha en que comienzan y cesan las requisiciones será fijada por decreto del Poder Ejecutivo.

El valor de las indemnizaciones será fijado administrativamente por comisiones mixtas integradas por funcionarios del Estado nacional, funcionarios locales (provinciales o municipales) y propietarios de zona, en representación de los posibles afectados, siendo sus decisiones recurribles ante la justicia federal tanto por los representantes del Estado como por los propietarios afectados.

Art. 33. — Durante la movilización podrán ser requisados los servicios personales de todos los habitantes obligados a prestar el servicio civil de defensa nacional, para trabajar por cuenta del Estado según su profesión u oficio, o según su aptitud física, en las tareas de la administración nacional, provincial o municipal, en los servicios públicos, o en los servicios y tareas privadas que funcionan en interés de la Nación.

Los requisados que estén sometidos a obligaciones de servicio militar definidas por las leyes de reclutamiento y sean utilizados en las tareas del servicio civil podrán ser incorporados a cuerpos especiales. La requisición de servicios personales puede efectuarse individualmente, o bien en forma colectiva, comprendiendo el conjunto de personas que forme parte de un servicio, equipo o empresa, considerado como indispensable para asegurar el buen servicio de los mismos.

Los jubilados de la administración pública y los que tengan derecho a retiro o jubilación en instituciones privadas podrán ser reincorporados o mantenidos en los servicios que prestaban, o bien llamados a otras tareas, teniendo en cuenta sus condiciones de aptitud física o intelectuales.

El sueldo, remuneración o salario de los movilizados en el servicio civil será fijado por la autoridad requirente sobre la base del sueldo inicial del empleo ocupado, o de la función desempeñada a la cual este empleo es asimilado.

Los salarios serán fijados en base a los salarios normales y corrientes en la industria respectiva o similar, según las leyes y reglamentaciones obreras en vigor o contratos de trabajo vigentes en el lugar.

El personal destinado al servicio civil podrá recibir, desde tiempo de paz, la cédula de destino para tiempo de guerra; en ese caso deberá acusar recibo y dar cuenta de todo cambio de domicilio ulterior a la autoridad que le confirmó el destino de movilización.

Cuando la comunicación de la cédula de destino hubiere sido hecha con carácter secreto por la autoridad correspondiente, la divulgación del destino asignado constituye para el autor de la divulgación el delito de violación de secreto, previsto y penado por los artículos 222 y 223 del Código Penal de la Nación.

Art. 34. — Sin perjuicio de la disposición general que declara requisables todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país que resulten necesarios para la defensa nacional, lo serán en especial y con prioridad para ser utilizados por las autoridades militares:

- 1º El alojamiento y acantonamiento de las tropas, el material y el ganado de las mismas.
- 2º El alojamiento y la atención de los heridos en los hospitales, sanatorios y casas particulares.
- 3º Los víveres para la alimentación de los oficiales y las tropas y el forraje para el ganado.
- 4º El vestuario y equipo para los oficiales y la tropa.

5º Los materiales, útiles y maquinarias destinados a las construcciones de carácter militar.

6º Los atalajes, el ganado, los vehículos hipomóviles y automóviles destinados a la carga y al transporte.

7º Los navíos, buques y demás embarcaciones que se encuentran en las costas marítimas, ríos, arroyos, lagos y canales de jurisdicción nacional cuando ellas son de matrícula argentina, incluso los servicios de sus tripulantes y personal necesario para su utilización.

8º Las aeronaves de matrícula nacional y el personal, instalaciones y material necesarios para su utilización.

9º La utilización de toda la capacidad de transporte de las aeronaves que sobrevuelan al territorio de la República, cuando ellas sean de matrículas extranjeras.

10. Los servicios ferroviarios y todos los elementos y materiales de las empresas ferroviarias del país de acuerdo con los artículos 19, 20 y 21 de la ley 2873.

11. Los servicios, instalaciones y materiales de las empresas de comunicaciones telegráficas, telefónicas y radiocomunicaciones.

12. Los puertos marítimos y fluviales, bases aéreas y aeropuertos.

13. Los recintos, locales y tinglados destinados a depósitos de materias primas y productos de la agricultura, ganadería e industria de elaboración.

Art. 35. — La requisición de efectos materiales y de establecimientos industriales puede ser efectuada a título de dominio o a título de uso.

La requisición a título de dominio consiste en la incautación definitiva de plantas industriales, fábricas, talleres, equipos, etcétera, para ser utilizados por el Estado por cuenta propia y como dueño, correspondiendo en consecuencia la indemnización por compra.

La requisición a título de uso es la incautación temporaria de los referidos establecimientos. Puede ser total o parcial, según que afecte a todo el establecimiento o sólo a una parte; por un período determinado de tiempo o sólo por algunas horas diarias; por uno o más turnos de trabajo, compartiendo la capacidad de producción con el propietario o empresa particular. En estos casos corresponde abonar la indemnización en relación al uso que el Estado hace de dichos establecimientos.

También podrá el Estado incautarse de la capacidad productiva, total o parcial, de las fábricas, talleres, etcétera, sin tomar posesión de los mismos. En este caso seguirán en manos de las empresas o propietarios particulares, pero con la obligación de trabajar por cuenta del Estado y a órdenes de las autoridades militares o civiles que se designen con todos sus medios, e incluso con todo su personal, ya sea en forma permanente, ya sea por horas o por turnos de trabajo.

El hecho de que el establecimiento industrial se mantenga en posesión de la empresa o propietario particular, no impide el contralor de fabricación ni la vigilancia y custodia militar del establecimiento.

El personal de los establecimientos industriales requeridos a título de dominio o a título de uso, o el que trabaje a órdenes del Estado en las fábricas militares y servicios públicos, estará sometido al ré-

gimen disciplinario que esta ley dispone para los movilizados en el servicio civil de defensa, mientras el Poder Ejecutivo en la zona del interior, y la autoridad militar en las zonas de operaciones, no dispongan someter a dicho personal a la jurisdicción de tiempo de guerra, conforme con lo establecido por el artículo 119, inciso 1º, del Código de Justicia Militar, o declare zona de guerra al recinto o lugar en que funciona la planta industrial, fábrica, taller, etcétera.

Art. 36. — El Poder Ejecutivo reglamentará el cumplimiento de la presente ley en cada uno de sus aspectos, pudiendo disponer contra las personas que en tiempo de paz no cumplan con las obligaciones establecidas en la misma sanciones consistentes en multa de \$ 5 a \$ 1.000, por la primera y segunda contravención, pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y administrativas que corresponda aplicar a los funcionarios o empleados de la administración pública por el incumplimiento de sus deberes.

Decretada la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias graves que afecten zonas importantes del país, el personal convocado para el servicio civil de defensa quedará sometido a las disposiciones del Código de Justicia Militar, en la misma forma que el convocado para el servicio militar. Deberá considerarse como causa especial de atenuación de las penas a aplicarse a los movilizados en el servicio civil la circunstancia de pertenecer al sexo femenino o ser menor de dieciocho años o mayor de sesenta para los convocados varones.

Art. 37. — El Poder Ejecutivo podrá disponer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, un régimen penal y disciplinario especial en tiempo de guerra para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la presente ley, especialmente en lo que concierne a la movilización del servicio civil de defensa, censos y requisiciones, movilización industrial y mano de obra, reprimiendo la no presentación, la demora y el abandono del servicio, la desobediencia, las faltas de respeto y las violencias o amenazas contra los superiores en la jerarquía técnica o administrativa, o contra las autoridades militares destacadas en los establecimientos industriales y demás organismos administrativos del servicio civil para la dirección, vigilancia o custodia de los mismos, o para el mantenimiento de la disciplina y el orden en el trabajo, así como sancionar todo abuso de autoridad contra los inferiores o la población civil, todo exceso o contravención en materia de requisiciones de servicios personales o recursos materiales, a condición de que las penas así dispuestas sean menos graves que las previstas por el Código de Justicia Militar para la represión de los mismos delitos.

El Poder Ejecutivo podrá igualmente disponer mientras lo crea oportuno que los movilizados en el Servicio Civil de Defensa sean juzgados aun en tiempo de guerra por los tribunales de la jurisdicción ordinaria de tiempo de paz y no por los tribunales de la Justicia Militar respecto a la aplicación de las sanciones establecidas en virtud de la presente ley.

Art. 38. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alvarez Pereyra. — Contrariando mi modo habitual, seré un poco extenso —de lo que pido excusas a la Cámara— por tratarse de una ley de suma importancia para el país, que ha levantado cierta suspicacia y temores, y que no dudarán desvirtuados con mi exposición.

El proyecto de ley de organización general de la Nación para la guerra, sometido por el Poder Ejecutivo a la consideración del Honorable Congreso, es un instrumento legal que permeabilizará al Estado encarar con unidad de acción y doctrina los problemas fundamentales de nuestra defensa nacional, respondiendo así al mandato expreso que el Honorable Congreso, por ley 12.913 —ratificatoria de los decretos 9.330/43 y 13.939/44— ha conferido al Consejo de Defensa Nacional.

Al crear dicho organismo se definieron como tareas fundamentales a cumplir: a) determinar la correlación entre la política internacional y la preparación de todas las fuerzas del país para responder a las necesidades de la defensa nacional; b) impartir a las distintas ramas del gobierno las directivas generales para la preparación y ejecución de la defensa nacional, fijándole los objetivos a alcanzar; c) armonizar la potencialidad del país en relación con su posición internacional y los múltiples factores que influyen sobre el desarrollo general de la Nación.

Para responder a tan alto cometido, el Consejo de Defensa Nacional, integrado por el señor presidente de la Nación y sus ministros secretarios de Estado, requieren en la actualidad ser munidos del instrumento legal que les permita desarrollar sobre bases estables y programas concretos de ejecución todo cuanto concierne a la preparación y organización de la defensa nacional.

Se justifica así que el actual Poder Ejecutivo de la Nación al formular su programa de gobierno —Plan Quinquenal— haya incluido como primer asunto en materia de defensa nacional y como la más fundamental de las tareas a cumplir en dichas actividades, la de dotar al país de la ley de organización general de la Nación para tiempo de guerra.

Sabido es que la guerra moderna ha dejado de ser el duelo militar entre los ejércitos de los países en lucha realizado de acuerdo con el Código del Derecho Internacional, para ser una lucha total de pueblo contra pueblo, la nación en armas, que exige y compromete todas las fuerzas materiales y morales de la Nación, y afecta todas sus actividades e intereses.

Por ello mismo, porque es una lucha de nación a nación, reclama la contribución integral de todos sus recursos y, por ende, una vasta y metódica preparación que le permita planificar desde tiempo de paz la oportuna utilización en tiempo de guerra de todos esos elementos que en hombres y recursos materiales integran el potencial bélico del país.

Esas previsiones para la adecuada, oportuna y más rápida utilización del material bélico, implica una labor de tal amplitud y de tan vastos aspectos, que no sólo no escapa a la comprensión de los técnicos y profesionales militares, sino al espíritu civil más desprevenido en materia de defensa nacional.

Muchos países han procedido, frente a estos mismos problemas y al impulso de las mismas preocupaciones, a dictar la legislación adecuada que permita la movilización integral de la nación para tiempo de guerra, y los que permanecieron remisos han tenido que sufrir las graves consecuencias de su imprevisión legislativa, realizando los aprestos de sus respectivas movilizaciónes tardíamente, bajo la urgencia de situaciones angustiosas y al impulso de improvisaciones costosísimas en vidas y recursos.

La ley que el Poder Ejecutivo reclama, tiene de justamente a evitar al país, en el remoto, pero no imposible acontecimiento de una contienda bélica, tener que lamentar las consecuencias de una movilización tardía, incompleta, improvisada y onerosa.

El sólido mensaje con que el Poder Ejecutivo acompaña el presente proyecto de ley, afirma tres conceptos substanciales que debo destacar ante esta Honorable Cámara. En ellos se compendia la necesidad, el alcance y la eficacia del texto legal que consideramos.

Se dice, en efecto, que la sanción del proyecto sometido a nuestra consideración, satisface un anhelo superior largamente esperado por los miembros de las instituciones armadas, a cuyos desvelos y preocupación profesional están reservadas las tareas de preparación y dirección de la defensa nacional.

Este proyecto, de convertirse en ley, permitirá a los organismos militares consolidar y aumentar en alto grado el poder defensivo de la Nación, confiando a su capacidad técnica, mediante una coordinación entre las misiones que competen a cada una de las fuerzas armadas de la Nación, dentro del plan general de defensa nacional. Coordinación que permitirá, sin duda, una utilización armónica y mancomunada de todo potencial bélico, evitando las consecuencias graves que en tiempo, energías y dinero, siempre comporta toda descentralización.

La conquista que significó en su hora la creación del Consejo de Defensa Nacional, como organismo superior y coordinador de la defensa nacional, debe ser completada por la creación del Estado Mayor de Coordinación, que será su verdadero órgano de estudio y asesoramiento, para la programación de planes y tareas que deberán cumplirse no sólo entre las dependencias de las fuerzas armadas, sino por intermedio de los organismos dependientes de las demás ramas de la administración civil, cuya cooperación y alistamiento, dentro de sus respectivas actividades, es tan importante y decisiva

como el que incumbe a las reparticiones militares. Ese organismo, que en gran parte —y mientras no se llegue al ministerio único de defensa nacional— ha de coordinar el esfuerzo y la acción de las fuerzas armadas, ha de ser también el organismo que planifique la acción de los ministerios civiles y las demás fuerzas vivas de la Nación, complementando así las tareas, que en lo que respecta a ejecución y vigilancia de los planes de defensa de dichos organismos no militares, le competen a la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, que ya se halla en funciones en todos los ministerios y secretarías de Estado nacionales y en las principales entidades autárquicas, grandes municipalidades, etcétera.

Dicha secretaría, que cuenta, además, con numerosas comisiones de estudio, integradas por especialistas de cada una de las actividades que interesan a la defensa nacional, complementará así la acción del Estado Mayor de Coordinación, en forma tal que el Consejo de Defensa Nacional, como organismo superior, pueda cumplir las finalidades fundamentales de defensa nacional, que por la ley de creación le corresponden.

El segundo aspecto que deseo destacar es que el proyecto de ley de organización del país para la guerra, que el Poder Ejecutivo ha sometido a la consideración del Congreso, lejos de ser una legislación novedosa, con los riesgos de la falta de precedentes y de experiencia, constituye una prudente y meditada síntesis de leyes análogas, dictadas en los países más autorizados en la materia, por su vinculación a las dos grandes conflagraciones que ha sufrido el mundo, perfectamente adecuada a nuestros medios y posibilidades y a la estructura política y social de nuestro país.

Como lo expresa el respectivo mensaje del Poder Ejecutivo, el proyecto en estudio tiene antecedentes tan numerosos como autorizados en la moderna legislación extranjera, leyes que han sido debidamente aquilatadas no solamente en su texto, sino a través de los resultados obtenidos en cada uno de los respectivos países, tanto en las tareas previas de preparación de la defensa durante la paz, como en el período de la movilización y en el propio decurso de las operaciones del período de guerra.

He cotejado el texto del proyecto, analizando los antecedentes de la ley francesa sobre organización general de la Nación para tiempo de guerra, dictada el 13 de julio de 1938, y sus enmiendas posteriores introducidas en 1947; la ley 969 del Reino de Italia, dictada el 8 de junio de 1925, sobre organización de la nación para la guerra, así como las que en el mismo país fueron sancionadas por el «organismo del alto comando y Estado Mayor General», el 11 de enero de 1923, y la de la Comisión Suprema de Defensa.

He tenido a la vista igualmente para ese cotejo y estudio, la ley alemana relativa a la prestación de servicios para fines de defensa nacional.

Con el mismo fin he pasado revista a las llamadas leyes de emergencia de Inglaterra, dictadas el 24 de agosto de 1939 —en vísperas de la última guerra mundial— y las ampliatorias que tuvo que dictar el 22 de mayo de 1940 y el 19 de agosto del mismo año: las leyes de los Estados Unidos de Norte América, creando el Consejo de Defensa Nacional (ley pública número 242, del 29 de agosto de 1916) y los decretos complementarios dados por el presidente Roosevelt, el 29 de mayo de 1940, reglamentando tardíamente la misión de la Comisión Consejera del referido Consejo de Defensa Nacional, y el decreto ulterior del 28 de diciembre de 1940 para la ejecución del programa de defensa nacional; igualmente las leyes de Chile, creando el Consejo Superior de Defensa Nacional, del 12 de mayo de 1906, decreto ley número 403, del 19 de marzo de 1925 y la ley número 7.144 del 5 de enero de 1942 y su decreto reglamentario número 1.028, del 22 de mayo de 1942; el decreto número 217, del 4 de noviembre de 1942, reglamentando el funcionamiento del Estado Mayor de Coordinación de la Defensa Nacional; el decreto número 4.242, del 29 de julio de 1942, organizando la defensa civil de Chile, y la última ley de febrero de 1945, sobre la misma materia. Finalmente, las leyes de creación del Consejo de Defensa Nacional de Brasil: decreto ley número 163, del 31 de diciembre de 1942 y decreto ley número 4.983, sobre movilización industrial y su completísima ley de requisiciones número 4.876.

De ese cotejo y comparación surge como conclusión evidente que, dentro del texto relativamente breve y conciso del proyecto en estudio, se han compendiado sabia y prudentemente cuanto de básico y estructural existe en los autorizados precedentes legislativos que he analizado. Y digo en cuanto contienen dichos decretos de estructural y básico, por cuanto el proyecto en estudio no ha consignado en la ley el detalle de la organización, ni el procedimiento que otras leyes preceptúan, revelando innecesariamente aspectos de organización que conviene mantener en reserva y atendiendo a que los organismos evolucionan y deben adaptarse a circunstancias cambiantes que las necesidades siempre sorpresivas de la guerra imponen.

Por ello, el Poder Ejecutivo establece en su mensaje que, aprobados los postulados básicos de esta ley, será tarea primordial y de vasto alcance, que quede reservada al Consejo de Defensa Nacional, reglamentar, con minuciosidad de detalles, cada rubro o capítulo respectivo.

Del análisis realizado sobre la base de las leyes extranjeras a que he aludido, puede afirmarse que es más completa que cualquiera de sus predecesoras, y que sumamente prudente en materia de facultades acordadas como poderes

de emergencia en tiempo de guerra, ninguna de sus disposiciones otorga facultad que no es autorizada por preceptos análogos y avalada por su aplicación, práctica en otros países con resultados que la propician por conveniencia y eficacia.

Repito que más que afán de previsión novedosa, es saldo acumulado de sabiduría y experiencia, perfectamente decantada y resumida en preceptos claros y concisos.

En último término, deseo subrayar que todas las facultades que para la organización general de la Nación en tiempo de guerra que el Poder Ejecutivo reclama para llevar a la práctica el programa de preparación del país para tiempo de guerra, están contenidas implícitamente en los llamados poderes de guerra que la Constitución nacional acuerda al presidente de la Nación como jefe supremo de la Nación y comandante en jefe de todas las fuerzas armadas del país.

Lejos de ser esta ley una ampliación de facultades, en el fondo, si bien se mira, es una prudente limitación que se quiere establecer para reglar aquellas facultades discrecionales y globales que en tiempo de guerra se ven en la necesidad de otorgar, bajo el rótulo de *poderes de emergencia* o *leyes de emergencia*, al conductor de la guerra los parlamentos que han permanecido inactivos en materia de defensa nacional.

El Poder Ejecutivo, a quien, repito, por ley del Congreso se lo ha constituido en presidente del Consejo de Defensa Nacional, para que, asistido de los organismos técnicos correspondientes civiles y militares, organice el potencial bélico del país para el evento indescado de una guerra, ha cumplido con la responsabilidad que le incumbe sometiendo a la aprobación del Honorable Congreso el instrumento legal que le permita realizar esa actividad vital del Estado, cual es asegurar la defensa nacional, la libertad y la soberanía de la Nación.

Corresponde al Honorable Congreso la responsabilidad de hacerla efectiva, prestándole la correspondiente sanción, sin dilaciones ni titubeos.

Debidamente estudiado el proyecto, y cotejado con los antecedentes más autorizados de la legislación extranjera, y por tratarse de una ley orgánica que obedece a un solo plan de conjunto, a una sola y patriótica inspiración, creo que corresponde, como es de práctica cuando se trata de cuerpos legales de carácter técnico, se le preste la aprobación a libro cerrado, seguros de que damos al Consejo de Defensa Nacional el instrumento legal que le es indispensable para cumplir debidamente el alto propósito para que fué creado.

Si la Constitución nacional y las leyes de la Nación imponen al excelentísimo señor presidente de la República, en su carácter de jefe supremo de la Nación, comandante en jefe de

todas las fuerzas armadas y presidente del Consejo de Defensa Nacional, la responsabilidad de adoptar todas las previsiones que conciernen a la preparación, organización y dirección de la defensa nacional, no puede el Congreso demorar o retacear los medios que el cumplimiento de la misión que le encomienda reclaman como imprescindible.

Corresponde otorgárselos ampliamente, tal cual se pide, tal cual lo reclama la enorme responsabilidad que se le ha impuesto como conductor político de la guerra y responsable de la defensa nacional.

Para terminar, diré con Hámilton, frente al análisis de los poderes que incumben al Poder Ejecutivo como jefe supremo de las fuerzas militares: «Al conductor de la guerra debe dársele todos los medios necesarios para lograr el fin que la guerra se propone, todos los medios para asegurar la victoria.»

Alejandro Hámilton, uno de los padres de la Constitución nacional de la gran nación del Norte, al referirse a los poderes de guerra del Poder Ejecutivo, decía: «Las facultades esenciales para el cuidado de la defensa común son éstas: levantar ejércitos; construir y equipar escuadras; dar reglas para el gobierno de ambos; dirigir sus operaciones; proveer a su sostenimiento. Estos poderes deberían existir sin limitación alguna, porque es imposible prever o definir la extensión y variedad de las exigencias nacionales y la correspondiente extensión y variedad de los medios necesarios para satisfacerla. Las circunstancias que ponen en peligro la seguridad de las naciones son infinitas; por esta razón no es prudente imponer ninguna traba constitucional al poder a quien se ha cometido su cuidado...» «Este poder debería estar bajo la dirección de los mismos consejos nombrados para dirigir la defensa común...» «Debe admitirse, como una consecuencia necesaria, que no puede haber limitación alguna a la autoridad que provee a la defensa y protección de la comunidad, en cualquier asunto esencial a su eficacia, esto es, en cualquier asunto esencial a la formación, dirección o sostenimiento de las fuerzas nacionales.»

«Esta exposición —dice Hámilton— reposa sobre dos axiomas tan simples como universales: los medios deben ser proporcionados al fin; las personas de cuya diligencia se espera la obtención del fin, deben poseer los medios suficientes para alcanzarlo.»

No niegue el Congreso lo que el presidente de la Nación reclama como instrumento legal para asegurar la defensa nacional, la independencia de la República y el prestigio de la soberanía. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Miel Asquía. — Hago indicación de que se adopte el texto del proyecto del Poder Ejecutivo como despacho de la Cámara en comisión.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la indicación del señor diputado por la Capital.

—Resulta afirmativa de 82 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda levantada la conferencia.

45

# ORGANIZACION DE LA NACION EN TIEMPO DE GUERRA

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar en general el despacho producido por la Cámara en comisión en el proyecto de ley sobre organización general de la Nación en tiempo de guerra.

—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración en particular.

Sr. Alvarez Pereyra. — Hago indicación de que se vote a libro cerrado.

Sr. Albricu. — Creo que la indicación del señor diputado por la Capital no es reglamentaria.

Sr. Alvarez Pereyra. — No hace falta leer los artículos.

Sr. Presidente (Cámpora). — La proposición del señor diputado por la Capital tiene el sentido de que se suprima la lectura del texto de los artículos, que tienen los señores diputados sobre sus pupitres, limitándose la Secretaría a enunciar los números.

Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 19.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 29.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 39.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 74 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 49.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 76 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 50.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 75 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 69.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 77 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 79.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 75 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 89.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 77 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 99.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 75 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 10.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 75 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 11.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 78 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 12.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 76 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 13.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 77 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 14.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 77 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 15.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 77 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 16.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 76 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 17.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 77 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 18.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 78 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 19.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 76 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 20.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 75 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 21.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 76 votos; votan 83 señores diputados.



Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 22.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 78 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 23.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 76 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 24.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 74 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 25.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 75 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 26.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 79 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 27.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 81 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 28.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 80 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 29.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 78 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 30.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 81 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 31.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 78 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 32.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 80 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 33.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 79 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 34.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 81 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 35.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 78 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 36.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 80 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 37.  
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 78 votos; votan 82 señores diputados.

— El artículo 38 es de forma.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda sancionado el proyecto de ley.

# CONFERENCIA. — ZONAS DE VUELO PROHIBIDAS

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda abierta la conferencia para tratar el proyecto del Po-